

FM -1840

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO

DE LA

PROVINCIA DE MADRID



CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO
DE LA
PROVINCIA DE MADRID

MEMORIA

DE LOS
TRABAJOS DE LA CÁMARA, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 1913

ENVIADA A LA DIRECCIÓN DE COMERCIO
EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
VIGENTES



Regt.º 2819.

SECRETARÍA Y OFICINA CENTRAL
CARRETAS, 14, PRINCIPAL
MADRID



CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO

PROVINCIA DE MADRID

MEMORIA

DE LOS

TRABAJOS DE LA CÁMARA CORRESPONDIENTE

AL AÑO 1913

ENVIADA A LA DIRECCIÓN DE COMERCIO
EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
VIGENTES



SECRETARÍA Y OFICINA GENERAL
CARRETERA N.º 1, PRINCIPAL
MADRID

ILMO. SR.:

LA Cámara Oficial de Comercio de la provincia de Madrid tiene el honor de elevar al conocimiento de V. I. la Memoria de los trabajos realizados por la misma durante el pasado año de 1913.

Esta Cámara, no sólo por ser la de la capital de España, sino porque aquí es donde se elaboran con fines más altos y generales, en bien del interés común, todos o casi todos los proyectos que han de realizarse luego en la vida nacional, tiene que ser, por necesidad ineludible de su propia existencia, consejera, unas veces, del poder público; apoyo, otras, de las medidas realizadas, y siempre modestamente inspiradora de una perfecta unión de las fuerzas mercantiles, iniciando cuanto tienda a su mejoramiento y progreso. En nuestro tiempo, más que en ningún otro, la energía individual, por grande que sea, puede poco; la fuerza colectiva lo puede todo.

Unida por vínculo apretado y solidario la clase mercantil, puede prometerse el logro de sus legítimas aspiraciones en todos los órdenes de la vida. Sin unión, no puede prome-

terse otra cosa que ser un mero factor económico, sin otra finalidad que la que por sí mismo pueda lograr cada uno de sus individuos. El grande y positivo servicio que estas Cámaras deben al Poder público — y justo es citar en esta ocasión el nombre del Sr. D. Fermín Calbetón, que debe ser oído con cariño por las clases mercantiles —, es que les ha dado, y muy generosamente, todas las condiciones y los medios para que esas clases se agrupen, aunen e identifiquen, de tal suerte, que lleguen en breve a ser una poderosa e invencible fuerza social.

Frente a las masas obreras, cada día más poderosas y dominantes desde que tienen organización, no hay más remedio que oponer, para que se equilibren y contrapesen otras fuerzas colectivas, y entre éstas, ninguna de mayor importancia y eficacia que la de la clase mercantil, que es y será siempre, por necesidad de su existencia, la intermediaria entre el productor y el consumidor, o, lo que es lo mismo, el vínculo de unión entre los dos más grandes elementos de toda Sociedad poderosamente organizada.

Por lo que toca a la importancia de esta clase mercantil en la vida general del Estado, tenemos ante nuestros ojos el el ejemplo alto, elocuente, que nos ofrece Inglaterra.

Los escritores modernos reconocen que no a los grandes estadistas ingleses, sino a sus grandes comerciantes, debe aquella Nación la grandeza sin igual de su Imperio. Una Compañía mercantil fué la conquistadora y la dueña de la India, y bien puede afirmarse que ni un solo palmo del territorio que en el mundo posee el pueblo inglés ha sido ganado por sus armas, sin que antes no haya sido explorado y conquistado por las naves de su Comercio.

Las consideraciones que preceden demostrarán a V. I. que la Cámara de Comercio de Madrid se ha percatado hondamente de la importante misión que le confiaran los Pode-

res públicos, y que, atenta a ella, ha procurado con singular desvelo corresponder, de una parte, a la confianza del Estado, y de otra, al sacrificio de sus electores al contribuir para su sostenimiento con un recargo sobre su contribución industrial.

Los medios económicos que le han proporcionado estos recursos le han permitido organizar sus servicios en forma tal que se cumplan con la mayor escrupulosidad y acierto los fines encomendados por la Ley y el Reglamento a estas Corporaciones. No era cosa fácil, dada la tradición de las Cámaras y el estado de postración en que se encontraban, por circunstancias bien ajenas a ella, el merecer la confianza absoluta e ilimitada de las clases que representaba y ser su consejera y directora en todos los asuntos de carácter general que afectasen a la misma. Pero con una labor de constancia y perseverancia, la Cámara de Comercio de Madrid se enorgullece en manifestar a V. I. que, si son muchos los asuntos en que oficialmente ha intervenido, como podrá verse por el texto de esta Memoria, son mucho mayores aun aquellas otras gestiones que ha realizado en beneficio de sus electores, que cada día en mayor número acuden a la Cámara persuadidos de que en cualquier hora del día han de encontrar quien les oiga, les atienda y procure servirles.

Esta es una labor que, aunque de gran eficacia, es modesta, porque no trasciende mas que a una esfera muy limitada y pequeña; pero esta Corporación ha tenido ocasión de ejercer su acción de un modo decisivo en asuntos de carácter verdaderamente nacional y que interesaban, por tanto, a la riqueza Patria.

Recordamos tan sólo a V. I. el viaje de los Delegados comerciales franceses a España, la Asamblea de las Cámaras de Comercio y, por último y muy reciente, su intervención en un conflicto de carácter económico, que se resolvió favo-

rablemente, sin duda alguna, gracias a la confianza y prestigio moral que el público concedió a la intervención en él de las clases mercantiles.

En la presente Memoria van especificados con gran detalle todos los asuntos que en el pasado año ha intervenido la Cámara, agrupados dentro de quince epígrafes, a saber:

- I. — *Aranceles y Tratados.*
- II. — *Asamblea de Cámaras de Comercio.*
- III. — *Comunicaciones Postales, Telegráficas y Telefónicas.*
- IV. — *Congresos y Exposiciones.*
- V. — *Expansión comercial.*
- VI. — *Gestiones municipales.*
- VII. — *Impuestos del Estado.*
- VIII. — *Legislación comercial.*
- IX. — *Necrología.*
- X. — *Orden interior.*
- XI. — *Reformas sociales.*
- XII. — *Relaciones hispanofrancesas.*
- XIII. — *Subvenciones y donativos.*
- XIV. — *Transportes y comunicaciones.*
- XV. — *Varios.*

Por todo ello podrá juzgarse de la labor de la Cámara durante el año 1913, que esperamos ha de merecer la aprobación de V. I. y la adhesión cada día mayor de las clases que representamos.

V.º B.º:
EL PRESIDENTE,
Carlos Prast.

EL SECRETARIO GENERAL,
José María González.

1.º enero 1914.

ARANCELES Y TRATADOS

REBAJA DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS EN NICARAGUA

El día 25 de julio del año 1850 se firmó en Madrid un Tratado de paz y amistad con la República de Nicaragua por los Plenipotenciarios de esta Nación y de España, los Sres. D. José de Manoleta y don Pedro José Pidal, respectivamente. El Tratado fué ratificado, canjeándose las ratificaciones en esta Corte el día 20 de mayo de 1851, con arreglo a lo dispuesto en su último artículo... — las ratificaciones se canjearán en esta Corte en el término de un año, o antes, si fuera posible —, estando representado el Gobierno español por su Ministro de Estado, que lo era a la sazón el Sr. Marqués de Miraflores, y la República de Nicaragua por su Enviado extraordinario, el Sr. D. Juan Luciano Bález.

Por dicho Tratado se conceden las dos Naciones mutuamente el trato de Nación más favorecida; y aunque en la sesión del Senado del día 6 de junio pasado los Sres. Ministro de Estado y Rahola expresaron, refiriéndose a las relaciones comerciales entre los dos países, que dicha cláusula se hallaba contenida en el art. 10, lo que al régimen mercantil se refiere se halla consignado en los artículos 12 y 13, pues aunque en aquél se habla de Nación más favorecida, tiene su relación directa con los efectos civiles en los súbditos de los dos países contratantes; y en el art. 14, refiriéndose al Cuerpo Diplomático y Consular y a los Agentes comerciales, se dice que tendrán o disfrutarán de los mismos «privilegios, franquicias e inmunidades de que se hallen en posesión los de igual clase de la Nación más favorecida».

El tráfico comercial entre España y Nicaragua, aparentemente es en extremo reducido; según las cifras que arroja la estadística española de 1911, nosotros importamos en dicho año en Nicaragua artículos por valor de 423.537 pesetas, principalmente tejidos de algodón y tejidos de punto, y respecto a la cifra de la exportación de este país a España, nuestra estadística la hace ascender a 5.517 pesetas, valor de mercancías que expresa bajo la nomenclatura de «Artículos cuyo valor parcial no ha llegado a 25.000 pesetas», y que, investigados en

aquella, encontramos que sólo la forman dos partidas: la que en el vigente Arancel figura con el núm.197, «Extractos tintóreos vegetales», con 1.165 pesetas, y la 611, «Manteca de vacas, margarina y cocaína o vegetalina», con 4.352.

Pero como para conocer la cifra exacta de lo que un país manda a otro no basta solamente con examinar la estadística de su exportación, sino que, al par, debe conocerse la de importación del otro país, y para averiguar lo que uno de éstos recibe de otro hay que proceder en sentido inverso — por las exportaciones que buscan la vía indirecta —, y en este momento, a pesar de haberla solicitado, no poseemos reciente estadística de Nicaragua que podamos comprobar, tal vez las cifras de las 400.000 y pico de pesetas que señala la nuestra no sea el valor a que en realidad ascienden las importaciones españolas en Nicaragua, tanto más cuanto que, por lo que después expondremos, muchas de éstas se hacen en dicha Nación como provenientes de otros países.

Aunque el art. 12 del Tratado a que nos referimos dice textualmente: «Entretanto que S. M. Católica y la República de Nicaragua ajustan y concluyen un Tratado de comercio y navegación fundado en principios de recíprocas ventajas para uno y otro país, los súbditos y ciudadanos de los dos Estados *serán considerados, para el adeudo de derechos, por los frutos, efectos y mercaderías que importen o exporten de los territorios de las Altas Partes contratantes, así como para el pago de los derechos de puerto, en los mismos términos que los de la Nación más favorecida...*», según leemos en el discurso pronunciado por el Sr. Navarro Reverter en la sesión del Senado que hemos citado al comienzo de estos renglones, la República de Nicaragua, allá por el año 1900 declaró que este artículo no regía; es decir, que, a su juicio, entre las dos Naciones no existía trato de favor. Esto no obstante, Nicaragua ha figurado hasta ahora, para los efectos aduaneros, incluida en el segundo grupo de la disposición décima para la aplicación de nuestro Arancel: «Naciones que gozan de todos los beneficios arancelarios, menos los de Portugal».

Según el régimen de Aduanas de aquella República, las procedencias de Naciones no convenidas deberán abonar, sobre la tarifa general de derechos de importación, un recargo de 25 por 100 *ad valorem*, cantidad que por Real decreto de 6 de marzo de 1909 se grava con otro 30 por 100 para determinados productos, cuando éstos son importados por la costa atlántica.

Y resulta que, en virtud de los Tratados que el pequeño Estado ha concluido con Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, las procedencias de estos países, según lo que acabamos de señalar, están exentas de

abonar ese 25 por 100 de recargo, debiendo, por tanto, hallarse en análogas condiciones nuestros productos, con arreglo al art. 12, que hemos transcrito en parte, de nuestro Convenio de paz y amistad con Nicaragua.

Pero como esta Nación declaró, según hemos dicho, que la cláusula de Nación más favorecida no regía para los productos españoles, si éstos se aportan directamente a dicho país, están en condiciones de visible inferioridad, pues se ven obligados a pagar ese recargo, a cuya exención tienen perfecto y legítimo derecho. De aquí el que, como decíamos más arriba, nuestras exportaciones busquen la vía indirecta.

Esta situación desventajosa ha motivado el que el comercio que sostiene relaciones con Nicaragua, percatado de los perjuicios que se le causan, háyase movido en busca de una medida que solucione este conflicto, y que el Ministerio de Estado diera instrucciones a nuestro representante en Guatemala a los efectos indicados.

En esta Cámara se tuvo noticia de que las gestiones del Gobierno habían logrado el que nuestros productos no abonen el 25 por 100 citado, pero bajo ciertas condiciones; y como al mismo tiempo coincidió esta noticia con las peticiones que formulaban varios comerciantes solicitando una noticia concreta sobre el asunto, el Presidente de esta Corporación, Sr. D. Carlos Prast, dirigió al Sr. Ministro de Estado una carta, cuya parte esencial hállese concebida en los siguientes términos:

«Tengo noticias de que, merced a las gestiones realizadas con plausible actividad por ese Ministerio, se ha conseguido que las mercancías procedentes de España a su importación en Nicaragua no abonen un 25 por 100 *ad valorem* de recargo sobre los derechos de Aduanas que tiene establecido aquella República para las Naciones no convenidas, cosa a que, en mi entender, teníamos perfecto y legítimo derecho, dado que, en virtud del Tratado de paz y amistad — si mal no recuerdo, de 1850 —, nuestro trato recíproco con Nicaragua es el de Nación más favorecida, y por los Tratados concluidos con Italia, Francia, América e Inglaterra, este país disfruta de la indicada rebaja.

» Pero como mis noticias son que ésta se ha concedido en determinadas condiciones, que serán comunicadas a usted por nuestro representante en Nicaragua, yo le suplico encarecidamente que, en cuanto las conozca, tenga la bondad de dárme las a conocer, a fin de trasladarlas a varias personas y entidades que de esta Cámara lo han solicitado.»

A esta carta contestó el Sr. Ministro de Estado en la siguiente forma:

«Tengo el gusto de participar a usted que, en efecto, merced a nues-

tras gestiones, el Gobierno de Nicaragua se ha mostrado dispuesto a conceder a las mercancías españolas la rebaja del 25 por 100 de los derechos arancelarios que disfrutaban las alemanas, inglesas, francesas e italianas, siempre que aquéllas estén comprendidas en la tabla *B* del Convenio vigente entre aquel país y Francia, y a condición de que el Gobierno de S. M. otorgue, en reciprocidad, las ventajas derivadas de la cláusula de Nación más favorecida a los productos de Nicaragua comprendidos en la tabla *A* de dicho Convenio.

» En cuanto se le comunicase la aceptación de estas bases, aquel Gobierno ofreció dictar un decreto ofreciendo dicha rebaja, que no se hará efectiva hasta dos meses después de publicado, a fin de evitar perjuicios a los comerciantes que tengan existencia de mercancías aforadas sin ella y disponiendo que la rebaja no dará lugar a reintegros ni reclamaciones; pero que las mercancías despachadas en los puertos españoles a la fecha de la promulgación del decreto, o registradas después de los dos meses señalados para que éste entre en vigor, pueden gozar de la tarifa mínima, presentando los importadores el correspondiente certificado de origen.

» Habiéndosele teleografiado, en 30 de julio, al Ministro en Centroamérica que manifieste a dicho Gobierno que España ya aplica a las mercancías de Nicaragua el trato de favor, espero que la publicación del decreto referido no se hará ya esperar; pero, no obstante, vuelvo a pedir por telégrafo noticias del estado de este asunto a nuestro representante.

» Debo manifestar a usted, finalmente, que estamos negociando un Tratado con aquel país, que substituya al de 1850, a qué usted alude, el cual ha sido denunciado por Nicaragua.»

Decreto del Gobierno de Nicaragua concediendo a los productos españoles que se importen en aquel país rebaja en los derechos arancelarios.

Por Real orden del Ministerio de Estado se remitió a esta Cámara copia del decreto por el cual el Gobierno de Nicaragua concede a los productos españoles que se importen en aquel país, mediante ciertas condiciones, el 25 por 100 de rebaja en los derechos arancelarios.

Como en la realización de este asunto había intervenido la Cámara de Comercio, se recibió con satisfacción esa noticia, y el referido decreto se publicó en el *Boletín* para conocimiento de los elementos interesados.

El decreto dice así:

« La Asamblea Nacional Legislativa decreta:

Artículo 1.º Gozarán de la rebaja del 25 por 100, en las Aduanas de la República, los productos españoles comprendidos en la tabla *B* de la Convención francesa celebrada el 27 de enero de 1902.

Art. 2.º El privilegio a que se refiere el artículo anterior durará mientras estén pendientes las negociaciones actuales para la celebración de un nuevo Tratado y las Aduanas españolas apliquen la segunda columna de su tarifa a los artículos nicaragüenses.

Art. 3.º El presente decreto comenzará a regir desde su publicación en la *Gaceta*.

Dado en el Salón de Sesiones. Managua, 2 de octubre de 1913. — Firmado: *Carlos Báez*, D. P.; *El Jerquín*, D. S.; *Salvador Muñoz*, D. S. — Publíquese: Casa Presidencial, Managua, 2 de octubre de 1913. *Adolfo Díaz*. — El Ministro de Hacienda y Crédito público, por la ley, firmado, *E. Cuadra*. »

LOS DERECHOS DE IMPORTACIÓN DEL CAFÉ EN LA ARABIA

Varios importadores de café presentaron una instancia a la Cámara de Comercio solicitando que apoyase la petición que la Cámara de Santander hizo al Sr. Ministro de Hacienda pidiendo que se aclarase la disposición 9.ª de nuestro Arancel, en el sentido de que los cafés que sean transbordados desde un buque a barcasas o depósitos flotantes y permanezcan en éstos hasta que sean cargados en un vapor a España, se les considere incluidos en los beneficios de la navegación directa, salvándose de este modo el tener que pagar los cafés procedentes de Arabia 147,50 pesetas cada 100 kilogramos, en vez de los 140 que señala la correspondiente partida del vigente Arancel.

La Cámara acordó apoyar esta justa petición de los importadores de café, y en este sentido dirigió la siguiente instancia al Sr. Ministro de Hacienda:

Excmo. Sr.: Los cafés procedentes de Arabia se hallan en condiciones de manifiesta inferioridad en cuanto a la cantidad que deben abonar por derechos de importación, respecto a los que se introducen en nuestras Aduanas originarios del Brasil, Venezuela, Puerto Rico y demás países a los que es tributario el nuestro en el consumo de dicho producto.

En efecto: la tercera columna de nuestro Arancel dispone que determinadas mercancías abonen un recargo sobre sus derechos de im-

portación, cuando procedan de Europa o hayan sido cargadas en un puerto europeo; es decir, cuando estén consideradas como procedencias indirectas.

Entre los productos que comprende la citada tarifa se halla el café, partida 8.^a, cuyo artículo, hasta el 31 de diciembre del año pasado, tenía señalado como recargo un derecho de pesetas 4,50 cada 100 kilogramos, derecho que por la ley de Presupuestos de 1913 ha sido aumentado en tres pesetas, mientras dure el impuesto transitorio con que dicha ley grava los productos coloniales que se hallan comprendidos en las partidas 635 a 643 del vigente Arancel.

La única Compañía de transportes marítimos, excelentísimo señor, que tiene servicio directo entre el puerto de Aden — donde han de ser cargados los cafés producidos en Arabia — y los de nuestra Nación es la Compañía Trasatlántica Española. Esta Compañía nacional, a la que el Estado subvenciona crecidamente, se niega a admitir mercancías en dicho punto, por impedirselo — dice la Trasatlántica — unas veces el estado sanitario de Aden, y otras, las más, el venir las bodegas de sus buques ya abarrotadas desde el arranque de línea, que, para esta de Filipinas a España, es el puerto de Manila.

Como consecuencia de esto, los importadores españoles de cafés originarios de Arabia se ven obligados a transportar su carga en buques de bandera extranjera, que, por no realizar el servicio directo a nuestros puertos, han de transbordarla en Marsella, no pudiendo, por tanto, disfrutar de los beneficios de la navegación directa. Y el citado producto, que si procede de la América del Sur y Central ha de abonar un derecho arancelario de 140 pesetas los 100 kilos, viniendo de Arabia ha de satisfacer 147,50 pesetas. Es decir, excelentísimo señor, que los importadores de estos cafés, como hemos señalado al principio, se hallan en condiciones de manifiesta inferioridad respecto a los de los demás.

Las siguientes cifras, tomadas de nuestra estadística de Aduanas, demuestran que la importación total de cafés en España va creciendo, y, por tanto, que se va extendiendo su consumo, a pesar de que en los tres últimos años su valor ha aumentado en un 16,34 por 100.

He aquí la estadística citada:

AÑOS	Kilogramos.	Valores en millones de pesetas.
1909.....	12.274.336	22,33
1910.....	12.836.972	21,82
1911.....	12.848.453	25,05
1912.....	13.377.589	26,08

Y las importaciones de cafés procedentes de Arabia, en el mismo período de tiempo, han sido las siguientes:

AÑOS	Kilogramos.	Valores en miles de pesetas.
1909.....	195.475	351,85
1910.....	214.688	364,93
1911.....	219.739	428,49
1912.....	260.836	508,63

Las precedentes cifras prueban que si la importación total de cafés, en los cuatro últimos años, ha crecido en un 8,24 por 100, la de los procedentes de Arabia ha tenido un aumento de 25,05 por 100, a pesar de que su valor se ha elevado, en dicho espacio de tiempo, en un 30,82 por 100.

Se impone, pues, a nuestro juicio, excelentísimo señor, teniendo en cuenta lo que estas consideraciones demuestran, en relación con las necesidades del consumo y los intereses de nuestros importadores, la adopción de una medida que de consuno satisfaga aquéllos y respete éstos.

Dicha solución podría ser el encontrar una fórmula, mediante la cual los cafés originarios de la citada península del Asia meridional pudieran ser incluídos en los beneficios de la navegación directa, pues así se eximirían del fuerte recargo que sobre los derechos de importación han de satisfacer, con arreglo a la ya citada columna de nuestro Arancel, y se les equipararía, en cuanto al pago de aquéllos, a los demás.

En apoyo de sus justas pretensiones, la Cámara de Comercio se permite recordar a V. E. una Real orden de 15 de abril de 1899, en la que, accediendo a lo que solicitaban los peticionarios — que se hallaban en un caso semejante al en que en la actualidad se encuentran los importadores de cafés arábigos —, se disponía que, para los efectos de aplicación de la tarifa 4.^a del Arancel entonces vigente, fuera considerado dentro de las procedencias directas a que hacía referencia la disposición 11.^a del citado Arancel el algodón en rama que se someta a determinadas condiciones, evitándose con ello el que tuvieran que abonar un recargo de 2,50 pesetas los 100 kilos. Y esta aclaración, que se hizo poco antes de la confección de nuestras tarifas aduaneras del año 10, figura hoy día incluída en las condiciones de aplicación de las que rigen actualmente.

Apoyada en este precedente, la Cámara de Comercio de Santander

solicitó de ese Ministerio, con fecha 17 de febrero de este año, que se aclarase la disposición 9.^a del actual Arancel en el sentido de que sean consideradas como procedencias directas «aquellas mercancías que, no teniendo su Nación de origen navegación directa con los puertos españoles, vengan con conocimiento directo y permanezcan sobre barcasas o muelles, sin ser almacenadas hasta la llegada del buque conductor para su transbordo, justificando debidamente dichos extremos». Y como una disposición en estos términos resolvería el problema que la imposibilidad del tráfico directo Aden-España ha planteado a los importadores de cafés arábigos, esta Cámara hace suya en todas sus partes la petición de la Cámara hermana, y, por tanto, a V. E.

Suplica que por el Ministerio de Hacienda se dicte una Real orden aclaratoria de la disposición 9.^a de los Aranceles de Aduanas que rigeu para el adeudo de las mercancías extranjeras que se importen en la península e islas Baleares, mediante la cual, de un modo análogo a lo que determina el apartado 3.^o de aquélla, respecto del algodón, al yute en rama y a los cueros sin curtir, puedan ser considerados como procedencias directas los cafés originarios de Arabia que cumplan con los requisitos a que hoy día son sometidos aquellos productos.

ADMISION TEMPORAL DE LOS DESPERDICIOS DE ARROZ

La Cámara de Tortosa solicitó de esta Corporación apoyase la instancia que aquélla había dirigido al Sr. Ministro de Hacienda a fin de que no se concediesen los beneficios de la ley de Admisiones temporales a los Sres. Deutsche y Compañía, fabricantes de almidones en Barcelona, que lo solicitaban para los desperdicios de arroz.

Como había transcurrido con exceso el plazo señalado por la ley de 14 de abril de 1888 para oponerse a toda concesión de admisión temporal, esta Cámara juzgó que no había lugar ni tiempo hábil para entablar la correspondiente reclamación, y en este sentido dirigió el siguiente oficio al Sr. Presidente de la Cámara de Comercio de Tortosa:

«De conformidad con lo dictaminado por su Comisión de Aranceles, esta Cámara de Comercio, en la sesión celebrada ayer tarde, acordó comunicar a la de su digna presidencia, respecto al apoyo que ha solicitado de ésta a la instancia que esa Corporación elevó al Ministro de Hacienda, a fin de que no se conceda a los Sres. Deutsche y Compañía la aplicación de los beneficios de la admisión temporal que solicitan para los desperdicios de arroz, «que estando señalado por el art. 7.^o de la ley de 14 de abril de 1888 que las Cámaras de Comercio, en el plazo

de treinta días, contados a partir de la publicación en la *Gaceta* de toda solicitud para acogerse a los beneficios de dicha ley, podrán informar a la Dirección de Aduanas lo que estimen pertinente», y habiéndose insertado en dicho periódico oficial la petición de la Casa Deutsche y Compañía el 27 de mayo de 1912, y estando, por tanto, transcurrido con exceso el plazo señalado para oponerse a toda concesión de admisión temporal, esta Cámara juzga que no hay lugar ni tiempo hábil alguno para entablar la correspondiente reclamación de un modo oficial, aunque de un modo oficioso se gestionará y apoyará el deseo de la Cámara de Tortosa.»

REFORMA DEL RÉGIMEN ACTUAL DE PAQUETES POSTALES Y COMERCIALES

Este asunto interesa en general a todas las clases comerciales de Madrid, y por ello son muy frecuentes las peticiones que ha recibido la Cámara para que gestionase una reforma en la legislación vigente sobre paquetes postales y comerciales, que hiciera mucho más eficaz este servicio para los comerciantes de Madrid.

En este sentido la Cámara de Comercio elevó una instancia al Excelentísimo Sr. Ministro de Hacienda diciendo que el actual servicio de paquetes postales y comerciales, en el que interviene el Cuerpo de Aduanas para el avalúo, tasas y percibimiento de derechos arancelarios, tiene lugar en una forma que retrasa el recibo de las mercancías importadas por estos medios en el territorio de la Nación. La inspección de los paquetes postales se verifica hoy en la frontera, y las mercancías que llegan debidamente reseñadas y descritas en los documentos exigidos por nuestras Ordenanzas de Aduanas y el Convenio internacional para el cambio de paquetes postales deben ser presentadas y verificada su apertura, ante la presencia de los empleados de Aduanas, por los agentes designados por las Compañías de ferrocarriles, que han substituido en estos servicios, según contrato, a la Administración postal.

Asimismo por Real decreto de 6 de septiembre de 1903 se estableció un servicio especial en las Aduanas de Irún y Port-Bou para el rápido despacho de bultos cuyo peso no excediese de cinco kilos, fijando almacenes independientes del general y simplificando los trámites de reconocimiento y comprobación por las autoridades aduaneras.

Este régimen especial implica el reconocimiento de medios rapidísimos, de trámites sencillos y de una intervención llana en sus proce-

dimientos para responder a las exigencias del tráfico comercial. Sin embargo, los preceptos actuales imponen demasiadas demoras, y podría favorecerse el servicio de paquetes postales y pequeños paquetes comerciales disponiendo que las mercancías que llegan a España, y con destino a Madrid, fueran reexpedidas inmediatamente.

La Renta de Aduanas no sufriría merma ni menoscabo, pues nuestra Administración de Aduanas competente, fecunda en iniciativas, podría imponer el uso de precintos para envases, sacas, paquetes, etcétera, etc., y asimismo, por medio de hojas de ruta o guías de circulación, inventariar la expedición y prevenir de este modo, durante el transporte de la frontera a Madrid, todo intento de fraude.

Igualmente, y necesitando un local especial, contiguo a la estación, para la intervención y adeudo de mercancías, estimamos no sería difícil conseguir a la Administración la cesión, por parte de las Compañías de ferrocarriles, de local adecuado para estos servicios.

Pero sin entrar en la organización administrativa de estos servicios, que deben quedar al sabio criterio y competencia técnica de V. E., limitase esta Cámara a suplicar a V. E. se sirva atender esta solicitud y ordenar que los paquetes postales, pequeños paquetes comerciales, con destino a Madrid, no sufran demora en la frontera, sean reexpedidos inmediatamente y se realice el aforo, avalúo y adeudo de los mismos en esta corte.

PRÓRROGA DEL PLAZO DE INFORMACION PARA LA REFORMA DE LAS ORDENANZAS DE ADUANAS

Sobre este asunto la Cámara de Comercio elevó una instancia al Ministro de Hacienda manifestándole que la constante evolución de las industrias, impulsada por los progresos de la Ciencia en todas sus manifestaciones, demanda del comercio en general una gran actividad y procedimientos rapidísimos que no pueden llenarse en nuestro país, por estar aquí el tráfico contenido y aprisionado por las tupidas redes de una Administración lenta y recelosa, ocupada principalmente en funciones fiscales y en ejercer sobre el contribuyente la más estrecha cuanto inútil vigilancia, que con sus trabas y dificultades impide se desarrolle entre nosotros el verdadero comercio moderno.

Si lo que en la vida general del comercio interior resulta siempre un grave mal, tiene que serlo mayor cuando afecta directamente a nuestras relaciones comerciales con otros países, y más aun cuando nuestros sistemas administrativos pueden ser motivo de acerba crítica

fuera de nuestro país, ofreciendo al juicio ajeno las consecuencias poco gratas de nuestras propias debilidades.

La información abierta antes y después de publicadas las Ordenanzas de Aduanas de 12 de octubre de 1894 puso al descubierto cuál era la verdadera opinión del país sobre dicha importantísima materia: allí se demostró claramente lo defectuoso de las disposiciones de 19 de noviembre de 1884 y la necesidad de marchar derechos, no a una reforma parcial de unos cuantos artículos, dejando íntegros los vicios del sistema, sino a una transformación total de procedimientos, por considerarla como único medio de colocar a la Administración y al contribuyente en condiciones apropiadas a la vida moderna.

Las Ordenanzas de Aduanas de 12 de octubre de 1894, inspiradas en el mismo anticuado criterio que las de 19 de noviembre de 1884, no podían llenar las aspiraciones del comercio, como se demostró más tarde en la información abierta por Real orden de 26 de diciembre de 1894, en la que de un modo preciso exteriorizaron los comerciantes el desencanto que les había producido la publicación de las Ordenanzas reformadas.

Después de poco más de dieciocho años de vigencia de las actuales Ordenanzas de Aduanas, se demanda nuevamente la opinión de las clases mercantiles para su nueva reforma; pero para tan importante labor, digna de un estudio detenido, sólo se concede el plazo perentorio de un mes, prorrogado luego por otro mes más, como si la reforma de un Reglamento de procedimientos de tan extraordinaria trascendencia, formado por 436 largos artículos, con más de una serie de disposiciones complementarias, que también precisan de reforma, pudiera ser estudiada en el breve plazo de sesenta días, y como si sobre estos asuntos pudieran formularse opiniones tan ligeramente sin correr los riesgos que en la práctica carecieran de la necesaria virtualidad.

Las actuales Ordenanzas de Aduanas no pueden reformarse parcialmente, porque esto equivaldría a mantener en ellas un espíritu que está reñido con las necesidades propias del comercio y hasta con los intereses de la Administración. En lo sucesivo, no hay medio de sostener sanciones penales que, sin tener fuerza alguna para descubrir y perseguir el verdadero fraude, constituyen una amenaza, cuando no un vejamen, para el comercio de buena fe; no es posible mantener una legislación que sólo sirve para producir trámites burocráticos interminables, a cuyo final siempre existe un perjuicio cierto para el comerciante, castigándose con la misma severidad la ignorancia o el descuido que el dolo o la mala fe; creemos de absoluta necesidad llegar a un régimen de confianza, en el que la Administración marche de

acuerdo con el contribuyente, pues sólo así pueden acrecentarse los ingresos del Tesoro y puede desarrollarse libremente la riqueza nacional.

Para lograr las aspiraciones generales del país, reflejadas en los párrafos anteriores, y poder confeccionar de mutuo acuerdo unas nuevas Ordenanzas de Aduanas, no basta el plazo concedido para emitir nuestros informes; de realizar la obra que se propone ese departamento ministerial del digno cargo de V. E., es preferible aplazar algo su publicación antes que consentir se promulgue en forma de que exija luego constantes modificaciones parciales, como hasta hoy ha sucedido porque es de tener en cuenta que las Ordenanzas de Aduanas afectan tanto al comercio español como al extranjero, y las reformas parciales, antes de ser bien comprendidas fuera de España, producen siempre notables perturbaciones en el tráfico internacional, casi siempre con consecuencias dolorosas para nuestro comercio.

Fundada en los hechos expresados, la Cámara de Comercio de la provincia de Madrid ruega a V. E. se sirva disponer que quede abierto el plazo para informar sobre las reformas que deben introducirse en las Ordenanzas de Aduanas y disposiciones complementarias que sirven de apéndice a las mismas, hasta fin del corriente año, con objeto de que así, mediante un estudio detenido y minucioso, concertadas convenientemente para ello todas las Cámaras de Comercio, aportando cada una de ellas los conocimientos que la práctica ha podido suministrarla, podamos, de común acuerdo, proponer en su día una obra, si no acabada y perfecta, por lo menos apropiada a las condiciones generales del comercio nacional en consonancia con los procedimientos que mayores resultados han llegado a producir en otros países.

PRESTACION DEL CONCURSO DE LAS CÁMARAS PARA EVITAR EL FRAUDE EN LA RENTA DE ADUANAS

Disuelta la Comisión de Defensa, creyóse necesario por la Cámara de Comercio reorganizar este servicio en forma tal que sus beneficios redundasen por igual en todos los comerciantes de España, y, por ende, en todas las Cámaras de Comercio.

En este sentido se creyó necesario consultar con todas estas Corporaciones, a fin de saber si estarían dispuestas a cooperar a los trabajos que en este sentido emprendiese la Cámara de Comercio de Madrid.

En la comunicación se les decía lo siguiente:

Por acuerdo adoptado en la última sesión en pleno, celebrada por

esta Corporación, me dirijo a esa Cámara para exponerle una situación de hecho que, a nuestro juicio, importa remediar, y en cuyos trabajos y necesarias gestiones creemos deben contribuir conjuntamente todas las Cámaras de Comercio y de Industria de España.

Pública y notoria es la idea generalmente extendida acerca del excesivo fraude que constantemente se realiza en la Renta de Aduanas, sin que con ello se ponga en duda siquiera la honorabilidad y competencia técnica, reconocidas por todas las clases sociales, y especialmente por la mercantil, del Cuerpo encargado de los servicios de recaudación. Importa, por tanto, prestarle ayuda y toda clase de cooperación desde nuestro modesto puesto y esfera.

A ello estamos obligados como españoles, facilitando y allanando la acción de las Autoridades oficiales; pero, además, a título de comerciantes, nos corresponde evitar el fraude, para que precisamente aquéllos que falsean e infringen las tasas señaladas en el Arancel puedan ocasionar una competencia ruinosa al comerciante que legalmente cumple todos los derechos de imposición que señala nuestra legislación arancelaria.

Estas consideraciones movieron a los comerciantes madrileños a constituir una Junta llamada Comisión de Defensa del Comercio y de la Industria.

La acción de este órgano ha sido doble: de una parte ha recabado del Gobierno de S. M. disposiciones facilitando y dando prioridad en la tramitación a las denuncias que las Cámaras de Comercio formulen contra industriales que, sin estar matriculados, ejercen industrias, y sujetando a los preceptos de la Ley y Reglamento de la contribución industrial y de comercio a los comerciantes extranjeros, que fácilmente rehuían la tributación debida al Estado, y de otra parte, una Real orden, que es la que principalmente nos interesa y está relacionada con el objeto de esta carta, en la que las Cámaras de Comercio—entre otros organismos—fueron autorizadas para designar Agentes que, propuestos y retribuidos por el comercio, pudiesen presenciar las operaciones de reconocimiento de equipajes y despacho de mercancías y paquetes postales en las Aduanas que esta Cámara previamente determinase. (Real orden de 31 de mayo de 1909.)

En virtud de esta Real orden nombráronse Agentes de la Cámara de Madrid en las Aduanas de Irún y de Behovia, retribuidos por la citada Comisión de Defensa, y nombrados, a propuesta de esta Cámara, por el Director general de Aduanas. Fueron encargadas de este servicio cinco personas, con los títulos de Agente-jefe, uno, y los demás con el de Subinspectores, retribuidos con un sueldo de 7.000 pesetas el pri-

mero y 2.500 los segundos, constituyendo una nómina de 17.000 pesetas anuales.

Esta Cámara, juzgando importantes los servicios de dichos Agentes, acordó subvencionar y contribuir a los gastos de la Junta de Defensa con 5.000 pesetas anuales, que hizo efectivas por la cantidad correspondiente a los tres trimestres últimos del año pasado; pero no siendo suficiente esa subvención, y luchando con dificultades económicas, la citada Comisión — creada para defender los intereses comerciales desde el punto de fiscalización del cumplimiento de las Leyes tributarias — cesó en sus funciones, disolviéndose en el mes de noviembre de 1912.

Disuelta la Comisión de Defensa por dificultades económicas, por la importancia del presupuesto de gastos, preséntase a esta Cámara el problema — ya que reconoce los grandes servicios de los Agentes — si debe aceptar la herencia de la citada Comisión de Defensa del Comercio y de la Industria y reorganizar los servicios, extendiendo el número de funcionarios, no solamente a las Aduanas de Irún y Behovia, sino a todas las que se juzgare oportuno para poder realizar cumplidamente la inspección en todas las Aduanas de importancia.

Esta Cámara, en principio, ha acordado encargarse y subrogar en todas sus funciones a la Comisión de Defensa; pero como el asunto requiere grandes gastos, e interesa por igual a todos los comerciantes e industriales de España, y, por tanto, se reconoce la necesidad de organizar cumplidamente los servicios, para que puedan tener efectividad, nos dirigimos a esa Cámara — así como a todas las demás hermanas — para que nos indiquen, si están conformes en la idea de reconstituir esos servicios, los medios y procedimientos que juzgaren más eficaces, así como la cantidad anual que esa Corporación podría designar en sus presupuestos para sostenimiento de estos trabajos de inspección.

Cuando todas las Cámaras hayan contestado a esta comunicación que las dirigimos, ordenaremos y presentaremos el resultado de la información, y en caso que aquél fuera favorable, procederemos a los trabajos de preparación, para que esas Corporaciones conjuntamente expresen su voluntad, dando forma definitiva a la reorganización de estos servicios, que han de depender directamente de las Cámaras que se asocien para este fin.

A esta comunicación contestaron la mayor parte de las Cámaras consultadas, ofreciendo, desde luego, su cooperación en las medidas de sus fuerzas.

INFORME SOBRE EL TRATADO DE COMERCIO CON FRANCIA

Solicitado el informe de la Cámara de Comercio sobre el futuro Tratado de comercio con Francia, se dirigió al Sr. Director general de Comercio acerca de este asunto el siguiente informe:

Ilmo. Sr.: Al elevar esta Corporación ante V. I. su informe sobre el Tratado de Comercio con Francia, vese obligada, por exigencias lógicas, a encuadrar las consideraciones sobre el Tratado dentro del marco general de la política arancelaria española. Es necesario comenzar examinando las líneas generales y principios de nuestra política, para, por un encadenamiento lógico, concluir examinando nuestras relaciones con Francia. Además, las modificaciones que ha de exigir un futuro Tratado con Francia suponen, desde luego, la rectificación de la actual orientación arancelaria, y debemos partir, por tanto, de un examen de las bases originarias de nuestro comercio exterior, que han de proyectar alguna modificación sobre el punto concreto en el cual vamos a informar.

Nuestra historia arancelaria contemporánea, a partir del año 1890, tiene un carácter eminentemente proteccionista. En verdad, por la ley de Presupuestos de 30 de junio y 1.º de julio de 1869 se reformaron los Aranceles de Aduanas, y en las bases establecidas en el Apéndice del mismo, letra C), se fijaban los derechos de Aduanas hasta el 15 por 100 *ad valorem*. Los derechos reconocidos y fijados, hasta el 35 por 100, tenían un carácter extraordinario, y por etapas sucesivas, marcadas en las mismas bases, habían de ir reduciéndose hasta el 15 por 100. Pero siendo Gobierno los conservadores, después de la Restauración, en el año 1875, suspendióse la aplicación de la base 5.ª de la ley de los Aranceles, dejando en suspenso las sucesivas rebajas de los derechos extraordinarios de Aduanas. Únicamente cuando ocupó el Poder el partido liberal volvió a ponerse en vigor la ley del 69, ordenando la reducción gradual de los derechos extraordinarios hasta llegar al tipo señalado en los derechos fiscales, o sea el 15 por 100 *ad valorem*. La orientación del partido liberal, sostenida y mantenida por el comercio español, facilitó las negociaciones con Francia, dando lugar al Tratado de comercio celebrado con Francia el 6 de febrero de 1882, que estuvo en vigor hasta el 1.º de febrero de 1892.

Por Real decreto de 24 de diciembre de 1890, y por autorización la ley de Presupuestos de 29 de junio del mismo año, fué derogada definitivamente la base 5.ª y las demás del Apéndice, letra C), de la ley

de Presupuestos de 1869, y se establecieron nuevos Aranceles, que comenzaron a regir desde 1.º de febrero de 1892. Desde entonces se instaura definitivamente el proteccionismo y se extiende a la totalidad de la producción española. Cuantos intentos se han realizado para romper con esta exacerbada protección han sido ineficaces, y un ejemplo de ello es el fracaso del Tratado comercial celebrado con Alemania, que no fué aprobado en el Senado. España ha vivido desde entonces autónomamente, libre de las imposiciones a que habrían de llevarle los Tratados de comercio, contratos de naturaleza completamente bilateral.

Desde 1892, sin ninguna clase de contrapeso en las esferas gubernamentales, esta tendencia autónoma adquirió más fuerza, hasta convertir el Arancel español en un muro, solamente posible de traspasar a trueque de la enorme tributación que suponen nuestros derechos arancelarios, y que cargan absolutamente sobre el consumidor español, y a esto nos ha llevado nuestra política de aislamiento, no queriendo participar de la vida de relación económica entre las Naciones sobre la base de un régimen contractual mercantil.

Actualmente tiene España un régimen arancelario muy parecido, en su estructura externa, al resto de los demás países. La forma jurídica externa es la de un régimen de Tratados estableciendo especiales condiciones para Portugal, el uso y empleo de cláusula de Nación más favorecida para los contratantes que no concertaren un Tratado especial y, por último, la aplicación de la tarifa 1.ª a las Naciones con las cuales no se hiciese pacto alguno. De hecho, sin embargo, nuestro régimen tiene otro aspecto. Desde el 30 de septiembre de este año ha terminado la situación especial con Portugal, y este régimen ha desaparecido después de algunos lustros de existencia, desvaneciéndose las confianzas puestas en el acercamiento y fraternidad de ambos países sobre la base de una especial solidaridad de intereses económicos. La importancia contractual en nuestras relaciones comerciales ha disminuído muchísimo con la terminación del Tratado con Portugal.

Las Naciones que hoy tienen Tratado de comercio con España son: Dinamarca, Suecia y Noruega, Países Bajos y Suiza. Los países del Norte ligan en los Tratados algunas partidas del Arancel español para sus artículos de mayor exportación, como bacalao, maderas, queso, etcétera, o se aseguran la aplicación a estos artículos de las tarifas más reducidas que apliquemos a otra Nación. Pero únicamente, entre todos los Tratados de comercio, una vez extinguido el de Portugal, tiene alguna importancia el Tratado celebrado con Suiza, y decimos esto porque las partidas en él fijadas pertenecen en su mayoría a artículos de las industrias que podemos llamar centrales.

Con todas las demás Naciones tenemos un régimen derivado de la aplicación de la cláusula de Nación más favorecida, y el resultado de todo esto es un régimen autónomo determinando nuestra política arancelaria, sin la alteración que exigen los Tratados, y estando, por tanto, en todo su vigor la tarifa 2.^a del Arancel.

En el año 1906 se promulgó nuestra ley de Bases arancelaria, y en ella se determinó una protección a la producción española hasta el 35 por 100 *ad valorem*, y para los casos en que hubiere producción similar en España, de un 15 hasta 50 por 100. En verdad, si se aplicase el máximo de 50 por 100, la protección española rebasaría en mucho el tipo señalado por List como protección moderada. Pero es el caso que muy raramente se hallan sometidas las mercancías a la carga arancelaria autorizada por la ley de Bases para la reforma de los aranceles del año 1906.

En la revisión de derechos, primero, y luego en la valoración anual de los productos importados, procedimientos necesarios para el cumplimiento de lo prescrito en, parecen perder las bases su propia fuerza y su valor de principio regulador, dando origen a un proteccionismo que rebasa la protección permitida y votada por las Cortes en la ley de 20 de marzo de 1906.

Y he aquí donde real y efectivamente aparece la protección con verdaderos caracteres agudos, y donde el sectarismo proteccionista ha llegado a tal punto, que es de admirar cómo la zona comercial española no ha llegado a ser campo acotado, donde no entre ninguna mercancía extranjera.

Creada la Junta de Aranceles y Valoraciones, y autorizado el Gobierno para aprobar los Aranceles y Valoraciones anuales, el Poder legislativo ha delegado, con la ley de Bases, una de sus funciones y facultades que creemos más importante. El planteamiento de problemas arancelarios en el Parlamento, en verdad, exige algo más que discursos repletos de vagos conceptos generales y facultades retóricas; pero dilucidándose en ellos el porvenir de todo el comercio exterior español, no deben perdonarse los sacrificios y estudios que exija la la cuestión de la formación de Aranceles. Autorizado el Gobierno para formar los Aranceles, no ha tenido orientación sino para recargar las tarifas. El Gobierno liberal, que, por su abolengo, parecía el indicado a representar una política que aligerase nuestro cerco aduanero, no ha hecho nunca de ello una cuestión de principios.

Predominando en los Gobiernos una orientación ultraproteccionista e incurriendo en cierta despreocupación por los problemas arancelarios, nuestra política comercial ha pasado a otros Centros, en los cua-

les la percepción de derechos arancelarios es su primordial finalidad, y que mide generalmente el resultado de su gestión por el aumento de la renta procedente de Aduanas.

Por esta organización, que ha ido cristalizando poco a poco, y por el predominio exclusivamente del interés fiscal, nuestros Aranceles han perdido toda su flexibilidad y se han convertido en un instrumento tan duro, que difícilmente podemos servirnos de él para iniciar conciertos, contratos o Tratados comerciales que supongan una nueva relación mercantil capaz de elevar el tráfico entre las Naciones contratantes. Por tanto, suponiendo que en la fijación de derechos de nuestros Aranceles haya errores en las operaciones del cálculo realizadas en las valoraciones, y dándose, por consiguiente, muchísimos casos en que se traspasa el máximo de protección señalada por la ley de Bases, la primera medida que debe decretarse, si verdaderamente se desea una política de Tratados de comercio, es una revisión arancelaria, y el sentido de esta revisión ha de estar orientado en los principios de un proteccionismo moderado.

Aunque esta Corporación no está conforme ni acepta el margen de protección de 35 a 50 por 100 señalado en la ley de Bases, aconsejaría, sin embargo, una revisión arancelaria, siempre que estrictamente se cumpliesen los principios señalados en la ley de Bases, no siendo falseados por pretextos de facturas y de documentación de dudosa procedencia.

Constituída la tarifa mínima, o, mejor dicho, construída la tarifa de conformidad con los principios de la ley de Bases, y modificando la formación de la tarifa 1.^a según ese criterio racional, y haciendo de ella un instrumento de defensa, tendríamos entonces un medio de contratación eficaz, y, encomendado a manos hábiles, habría de facilitar los futuros Tratados, dando origen a una vivificación de nuestro cristalizado comercio exterior. Entonces, con la modificación de los Aranceles, podría hablarse de una renovación de nuestra política comercial, de iniciar aproximaciones y negociaciones, en vista de futuros Tratados de comercio, y ante las demás Naciones garantizaríamos la sinceridad de nuestras aspiraciones con las pruebas irrefragables de los hechos, facilitándolas con una inicial limitación de nuestro proteccionismo, que ha dificultado hasta ahora la celebración de Tratados comerciales.

Sobre esta base, repetimos, podría hablarse de Tratados comerciales. Con los Aranceles actuales decimos que no es posible, y constantemente seremos desoídos por las Naciones a las cuales hagamos proposiciones de Tratados comerciales.

Por tanto, esta Cámara, favorable siempre a los Tratados, reconoce la necesidad de reformar nuestros Aranceles, y pide una revisión arancelaria, inspirada en un proteccionismo moderado, para que, de esta suerte, poseamos un instrumento o medio que facilite los futuros Tratados o Convenios mercantiles.



Al aconsejar esta Cámara una revisión arancelaria, en vista de los futuros y posibles conciertos mercantiles, expresa, enfocando el problema desde su origen y bases fundamentales, la conveniencia de celebrar Tratados de comercio con todas las Naciones.

La cristalización de nuestro comercio exterior se debe principalmente a aquella política de aislamiento arriba mencionada y a la falta de Tratados de comercio con las Naciones que ocupan un puesto privilegiado en la producción y tráfico internacional, como, por ejemplo, Francia, Estados Unidos, Alemania, etc., etc.

En todas las Naciones puede señalarse un crecimiento en el movimiento y volumen de mercancías del comercio exterior, mientras que en España el comercio sigue relativamente estacionario. Los siguientes datos expresan el desarrollo del comercio exterior de algunos países, tomando como base de cálculo el año 1892 y de desarrollo el 1910 o el 1911:

CRECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR

Rusia.....	203 por 100.
Estados Unidos.....	192 —
Alemania.....	154 —
Italia.....	152 —
Bélgica.....	124 —
Austria Hungría.....	104 —
Serbia.....	92 —
Francia.....	75 —
Inglaterra.....	72 —
España.....	24 —

A pesar de figurar España en el último lugar y ser tan pequeño el crecimiento de su comercio, todavía habría necesidad de rebajar la cifra, si atendiéramos al estado de los precios, los cuales, habiendo aumentado para casi todas las mercancías, hacen subir la cifra del comercio exterior, aun cuando el peso y volumen de las mercancías permanezcan constantes.

La causa principal de este lento desarrollo, cuando es general el crecimiento y la extensión económica, debe atribuirse principalmente a la falta de Tratados comerciales. Podría afirmarse que la producción nacional ha aumentado y que el consumo interno de productos nacionales ha limitado la importación y preponderancia que antes tenía en nuestro consumo la producción extranjera. Pero este mismo razonamiento viene a confirmar nuestra creencia en la eficacia de los Tratados. Confiamos en que éstos estimularían la producción nacional, obligándola a conservar su mercado interior por medio de la perfección técnica, por una organización mercantil más racional y por la baratura en la producción, pues trabajando la industria nacional, con el margen de protección que hoy tiene, le falta toda emulación y vive con la tranquilidad propia de los *beati poseendi*.

El resultado de todo lo anterior es el encarecimiento de las mercancías, que origina una disminución en las transacciones, las dificultades en el tráfico y la paralización de la vida mercantil. El estado del comercio madrileño es una comprobación de lo dicho. En otro tiempo floreciente, como ejemplos de talentos encumbrados por sus iniciativas mercantiles, reflejaba en todas las ramas del comercio la actividad y plétora de negocios. La situación presente, después que han desaparecido los Tratados, es muy otra. Vive con dificultad, y cuando logra vencer las dificultades y trabas de la tributación, tiene por delante el último y mayor obstáculo, que es nuestro proteccionismo exagerado.

Por estas razones reconoce esta Cámara la conveniencia de celebrar Tratados de comercio, que supondrían una renovación en la atmósfera mercantil creada por nuestra política arancelaria, iniciada el año 1891.

No debemos tampoco desaprovechar los movimientos de gobierno y opinión en el extranjero, favorables a la política de Tratados y a todo sistema que signifique una protección menos acentuada de la que actualmente rige en casi todos los pueblos. Orientación y política como la de Mr. Wilson, Presidente de la República de los Estados Unidos, debe acogerse con simpatía, y, sin esperar mayores requerimientos, darnos pie para iniciar negociaciones comerciales que lleven al Convenio o Tratado de comercio.

Pero no solamente para el comercio interno, sino para el comercio de exportación, tiene esto una gran importancia y trascendencia.

Esta Cámara aconsejaría, para facilitarlo, la supresión de la cláusula de Nación más favorecida, comodín que sirve hoy para saltar sobre el trabajo y laboriosidad que representan la preparación de un

Tratado, y medio para que Gobiernos y políticos encuentren las facilidades de una fórmula que dé estado legal a nuestro comercio exterior, aun cuando con ello se perjudique a la vida mercantil española. Pero como la supresión de la cláusula de Nación más favorecida implicaría un cambio radical en nuestro sistema, que aconsejamos, pero que sólo puede hacerse cuando en los Poderes públicos existe una fuerte corriente partidaria de los Tratados, y cuando ella está sostenida por un Cuerpo técnico y de una competencia tan acabada y perfecta que sea capaz de concertar en corto plazo toda una serie de Tratados de Comercio, esta Cámara, que no peca de optimista en este respecto, aconseja la conservación de la cláusula de Nación más favorecida, por los beneficios que puede rendir, haciendo un discreto uso de ella, pero condenando el empleo que actualmente se hace, y que solamente sirve para acentuar más y más nuestro aislamiento y margen protector de la producción española.

Representando esta Cámara la política de Tratados de comercio, y habiendo expresado en todos los tonos la conveniencia de tratar con el mayor número de Naciones posibles, naturalmente, es partidaria de celebrar el Tratado con Francia. Y el Tratado habría y debe de tener una gran significación y trascendencia, porque Francia, país vecino, es la Nación que ocupa el primer lugar en el comercio exterior español, y segundo, por ser una gran potencia económica y de un grande e intenso comercio. La celebración del Tratado supondría la inmediata rectificación de nuestros Aranceles, pues correspondiendo las concesiones españolas a las industrias centrales, se aligerarían nuestras tarifas, lo cual implicaría un cambio de política y tendría el Tratado gran influencia, porque las rebajas se extenderían a los demás países, en virtud de la cláusula de Nación más favorecida, y como estas ventajas no habían de concederse sin reciprocidad, obligaríamos a los demás países a celebrar Tratados con España, que es, precisamente, lo que aconseja esta Cámara. Es decir, que el futuro Tratado con Francia puede representar el momento inicial de la política afirmada por nosotros.

Sin duda, las dificultades que habrán de vencerse en las futuras negociaciones no serán pequeñas, pues hay varios hechos que expresan la continuidad del espíritu proteccionista iniciado en Francia con los Aranceles de 1892. No hay que olvidar que el proteccionismo francés es de origen eminentemente agrario, y que el partido que inició y sostuvo aquella tendencia tiene mucha fuerza actualmente en Francia.

Recordemos algunos hechos:

El comercio de vinos. — Alrededor de este producto giran las principales peticiones de cuantos reclaman un Tratado con Francia. El vino

y las cantidades exportadas a Francia trajeron a nuestra población rural, en época no muy lejana, una pingüe fuente de ingresos. El labrador llegó a contar en su renta anual con dos fuertes cosechas de valor casi iguales: la cosecha de cereales y el vino de la vendimia de otoño.

Desde 1879 a 1902 se suceden los años que marcan el apogeo e intensidad de nuestra exportación. Estos años coinciden con un régimen comercial de Tratados con Francia, que luego se interrumpe para convivir Francia y España en un régimen de pacto que tiene por base la concesión recíproca de la cláusula de Nación más favorecida.

Francia y España convienen en aplicarse los beneficios que hicieren a otras Naciones contratantes, pero entre ellas ya no se ligan partidas ni se hacen concesiones en consideración a su específica producción nacional. Conviven dentro de la cortesía comercial de lo aceptado, es decir, en convenio con el reconocimiento de los títulos y beneficios derivados de la cláusula de Nación más favorecida.

Desde que hemos interrumpido la cordialidad o el régimen de Tratados, aparece la disminución en el valor de nuestra exportación, y como los intereses de la población rural española sufrieron con esta disminución gran quebranto, es opinión muy extendida que España debe, para salvarnos, volver sobre sus pasos y comenzar las negociaciones, creyendo, de este modo, a pesar de nuestro proteccionismo industrial, que Francia establecería una tarifa para nuestros vinos parecida a la del año 1882, y así podríamos revivir otra vez la vida económica con Francia de los años 1882 al 1892, pues un Tratado con Francia, dicen, traería consigo aquel régimen.

No lo creemos nosotros así. En la vida económica de Francia, como en la de España, hubo muchas transformaciones. La producción evolucionó, y el capital realizó una emigración interna hacia otras industrias. Esta tan distinta estructura creemos hace imposible que aquellos hechos se repitan.

¿Cuál y cómo es la historia de este comercio exterior? ¿Cuál es la legislación francesa sobre las importaciones del vino?

Hagamos historia de las tarifas aduaneras en Francia y de las vicisitudes de la producción interna, para ver cómo una y otra motivaron el descenso de nuestra exportación, aunque el hecho de que los vinos de Aragón, Alicante y Haro no se cotizan ya en el mercado francés, desde el año 1906, nos indica lo desmedrado de nuestro comercio.

Tarifas. — Según la ley de 16 de mayo de 1861, pagaba el vino de cualquier graduación, 0,25 francos por hectolitro; por la ley del 8 de julio del 71, la tarifa general señaló 5 francos, y la mínima 0,30 francos para los vinos menores de 14 grados.

La ley del 7 de mayo del 81, o sea la tarifa aplicada a nuestros vinos en el período de mayor expansión, fijaba los siguientes derechos:

Tarifa general, 4,50 hectolitro; tarifa convencional, 2 francos hectolitro.

Los vinos con mayor riqueza alcohólica de 15 grados pagaban un derecho de importación, por la cantidad superior a 15 grados, igual al derecho interno sobre el alcohol.

Este periodo, calificado de semiproteccionismo, se convierte en un franco proteccionismo en el Arancel de 13 de enero de 1892, donde aparece el vino, en la partida 171, con los siguientes derechos (copiamos del Arancel):

<i>Bebidas:</i>	Tarifa general.	Tarifa mínima.
	<i>Pesetas.</i>	<i>Pesetas.</i>
Vinos procedentes de la fermentación de uvas frescas, hasta 11°, es decir, 10,9°.....	1,20 por grado y hectolitro....	0,70 por grado y hectolitro.
Idem desde 11° hacia arriba.....	Lo mismo; pero desde los 10,9° con la tasa del alcohol.....	Lo mismo; pero con la tasa sobre el alcohol.

El régimen de vinos del Arancel del 92 fué modificado por una ley posterior, la de 1.º de febrero de 1899, que subió la tarifa general a 25 pesetas hectolitro, y la mínima a 12, para los vinos menores de 12 grados. Los vinos más espirituosos pagaban por el número de grados de alcohol que tuvieran en cantidad superior a 12 grados, y con arreglo al derecho interno sobre el consumo del alcohol.

Esta ley, que es la que actualmente rige, fué gravada por la de 1900, que subió el impuesto sobre el alcohol de 156 a 220 francos. De esta suerte, los vinos superiores a 12 grados pagaban 2,20 francos por grado superior a 12 grados.

Es decir, hasta 12 grados por hectolitro, 12 pesetas; hasta 13 grados, $12 + 2,20 = 14,20$; hasta 14 grados, $12 + 4,40 = 16,40$; hasta 15 grados, $12 + 6,60 = 18,60$.

Todavía la ley de 8 de julio de 1906 ha modificado los derechos, subiendo la tarifa general a 35 pesetas por hectolitro.

Por tanto, nuestros vinos han tenido sucesivamente el siguiente régimen, calculado únicamente para tarifa convencional o mínima:

Año 1863, por hectolitro, 0,25 pesetas; año 1871, por hectolitro, hasta 14 grados, 0,30; año 1881, por hectolitro, hasta 14 grados, 2; año 1892, por hectolitro, hasta 10,9 grados, 7; año 1899, por hectolitro, hasta 12 grados, 12.

A continuación damos los siguientes datos, sacados de la Estadística francesa:

**Vinos importados en Francia (no comprendidos los vinos de licores y de Argelia).
ESTADÍSTICA FRANCESA**

AÑOS	PAISES DE PROCEDENCIA			Derechos percibidos de la tarifa mínima por hectolitro.
	ESPAÑA — <i>Hectolitro.</i>	ITALIA — <i>Hectolitro.</i>	Importaciones totales del extranjero, excepto Argelia — <i>Hectolitro.</i>	
1860	139.409	17.111	160.000	»
1861	200.676	16.407	232.000	»
1862	80.396	10.548	102.000	»
1863	49.391	17.053	80.000	25 céntimos.
1864	75.130	6.521	94.000	»
1865	55.954	3.592	74.000	»
1866	37.491	3.955	52.000	»
1867	140.483	9.573	170.000	»
1868	332.186	8.426	359.000	»
1869	292.093	6.507	334.000	»
1870	71.961	14.887	99.000	»
1871	52.382	26.758	112.000	30 céntimos hasta 14 grados.
1872	169.531	288.547	478.000	»
1873	518.816	49.333	602.000	»
1874	538.752	50.214	637.000	»
1875	124.371	58.377	245.000	»
1876	253.235	267.655	614.000	»
1877	402.337	141.826	645.000	»
1878	1.298.286	180.387	1.522.000	»
1879	2.223.152	522.754	2.825.000	»
1880	5.037.029	1.582.864	7.078.000	»
1881	5.632.407	1.532.257	7.693.000	2 francos hasta 15 grados.
1882	6.129.783	781.898	7.374.000	»
1883	6.141.084	1.906.703	8.743.000	»
1884	5.101.310	2.148.623	7.809.000	»
1885	5.610.485	867.410	7.715.000	»
1886	6.319.318	1.907.831	10.403.000	»
1887	7.151.756	2.702.981	11.372.000	»
1888	7.764.712	1.041.220	10.669.000	»
1889	6.878.449	101.737	8.661.000	»
1890	7.658.352	20.033	8.565.000	»
1891	9.397.294	10.912	10.629.000	»
1892	5.393.273	334.463	6.286.000	7 francos hasta 10,9 grados.
1893	3.429.997	119.469	3.830.000	»
1894	2.026.147	24.793	2.223.000	»
1895	2.858.564	18.536	3.135.000	»
1896	4.997.227	15.876	5.270.000	»
1897	3.255.912	12.488	3.445.000	»
1898	4.716.899	14.279	4.884.000	»
1899	3.170.596	52.102	3.420.000	12 francos hasta 12 grados so- bretasa para los grados que excedan de 12.
1900	2.191.688	85.146	2.477.000	Los derechos sobre el alcohol, pasando de 156 a 220 fracs.
1901	640.162	21.191	116.000	»
1902	342.486	20.088	398.000	»
1903	914.737	77.210	1.174.000	»
1904	816.189	51.346	1.253.000	»
1905	136.942	21.248	198.000	»
1906	(1) 83.664	14.259	140.000	Reorganización de la tarifa general.

(1) Cifras provisionales.